

TRIBUNAL CALIFICADOR

El tribunal calificador de la convocatoria para la cobertura por oposición, en turno libre, de veintiséis plazas de Auxiliar de Administración General, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de Zaragoza, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2023, 2024 y 2025, de la que se dio publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza n.º 57, de 12 de marzo de 2026, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2026, ha acordado:

PRIMERO.- Hacer público el cuestionario de preguntas y respuestas del primer ejercicio de la oposición:

1. Conforme al artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuál de las siguientes circunstancias permite suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver y notificar un procedimiento administrativo?

- a) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimientes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente, sin necesidad de previa comunicación a los mismos.
- b) Cuando para la tramitación del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento.
- c) **Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.**
- d) Cuando exista un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución, desde que se tenga constancia de su resolución.

2. De acuerdo con el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, si una solicitud de iniciación no reúne los requisitos legalmente exigidos, la Administración requerirá al interesado para que la subsane. Si este no lo hace en el plazo concedido:

- a) La Administración inadmitirá la solicitud mediante actuación verbal del instructor.
- b) **Se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos legalmente previstos.**
- c) La solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo positivo.
- d) Se producirá la caducidad automática del procedimiento sin necesidad de acto formal.

3. Para que las Administraciones Públicas puedan declarar de oficio la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos firmes o que pongan fin a la vía administrativa, conforme al artículo 106.1 de la Ley 39/2015, es requisito imprescindible:

- a) **Dictamen previo favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.**
- b) Dictamen preceptivo del Consejo de Estado, que tendrá carácter no vinculante.



- c) Que el procedimiento se inicie obligatoriamente de oficio y nunca a solicitud de interesado.
- d) Que el acto incurra en un vicio de anulabilidad de los previstos en el artículo 38 de la Ley 39/2015.

4. En relación con el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (artículo 14 de la Ley 39/2015):

- a) Las personas físicas están obligadas en todo caso a relacionarse por medios electrónicos con cualquier Administración.
- b) Las personas jurídicas pueden elegir libremente en todo momento si se relacionan presencialmente o de forma electrónica.
- c) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a ello reglamentariamente o por el ejercicio de una actividad profesional.**
- d) Los funcionarios públicos no están sujetos a la obligación de relacionarse electrónicamente para los trámites que realicen por su condición de tales.

5. A tenor del artículo 43.2 de la Ley 39/2015, cuando una notificación efectuada a través de medios electrónicos sea puesta a disposición del interesado y este no acceda a su contenido:

- a) Se entenderá rechazada y por efectuado el trámite al día siguiente de la puesta a disposición.
- b) La Administración deberá intentar obligatoriamente la notificación por medios no electrónicos.
- c) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.**
- d) Se entenderá rechazada transcurridos quince días hábiles desde el envío del aviso a la dirección de correo electrónico.

6. Respecto a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común (artículo 96 de la Ley 39/2015), la Administración podrá acordarla:

- a) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento lo aconsejen, de oficio o a solicitud del interesado.**
- b) Exclusivamente a solicitud expresa del interesado dentro de los cinco primeros días de tramitación.
- c) En cualquier momento del procedimiento, incluso tras la firma de la resolución.
- d) Únicamente cuando exista una orden jerárquica dictada por el órgano directivo competente.

7. ¿Cuál es la finalidad u objeto principal de la declaración de lesividad regulada en el artículo 107 de la Ley 39/2015?

- a) Revocar directamente en vía administrativa los actos favorables que sean constitutivos de infracción penal.
- b) Declarar la lesividad para el interés público de un acto favorable para los interesados que sea anulable, a fin de proceder a su posterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.**
- c) Transformar de pleno derecho un acto anulable en un acto nulo de pleno derecho.
- d) Eximir a la Administración de la obligación de resolver los recursos administrativos interpuestos contra dicho acto.



8. Según el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio positivo como regla general, EXCEPTO cuando:

- a) Una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.**
- b) Únicamente una orden ministerial o un reglamento autonómico prevean expresamente el efecto desestimatorio.
- c) El interesado no haya presentado escrito de denuncia de mora o recordatorio antes del vencimiento del plazo.
- d) Se trate de procedimientos cuya estimación transfiera al solicitante facultades relativas al dominio público o al servicio público, en los que el silencio será siempre positivo.

9. La estimación por silencio administrativo positivo, según el artículo 24.2 de la Ley 39/2015:

- a) Produce un mero efecto de trámite que faculta para continuar el procedimiento.
- b) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.**
- c) Permite a la Administración dictar ulteriormente una resolución expresa desestimatoria sin restricciones.
- d) Solo surte efectos tras la expedición del correspondiente certificado acreditativo por la Administración.

10. Conforme al artículo 124.1 de la Ley 39/2015, el plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición contra un acto administrativo expreso es de:

- a) Diez días hábiles contados a partir del día de recepción de la notificación.
- b) Dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se dictó el acto.
- c) Tres meses contados desde la fecha en que finalizó el plazo para resolver el procedimiento.
- d) Un mes, si el acto fuera expreso, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación o publicación.**

11. Dentro de los medios de ejecución forzosa regulados en el artículo 102 de la Ley 39/2015, las multas coercitivas:

- a) Tienen carácter de sanción administrativa acumulable a la responsabilidad disciplinaria.
- b) Son independientes de las sanciones que puedan imponerse y compatibles con ellas.**
- c) Requieren en todo caso la previa autorización judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
- d) Son un sustitutivo pecuniario de la ejecución subsidiaria que extingue la obligación principal.

12. En materia de recursos administrativos en la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta:

- a) No cabe interponer recurso potestativo de reposición contra la resolución de un recurso de alzada.**
- b) El órgano que resuelva un recurso podrá resolver cuestiones no alegadas por los interesados sin necesidad de darles audiencia previa.



- c) Los actos de trámite que pongan fin a la vía administrativa son recurribles directamente en alzada.
- d) El recurso extraordinario de revisión por error de hecho debe interponerse dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha de adopción del acto.

13. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, la ampliación de los plazos establecidos en el procedimiento administrativo:

- a) Podrá acordarse de oficio o a petición de los interesados; no podrá exceder de la mitad de los mismos y no debe perjudicar derechos de tercero.**
- b) Podrá concederse por un período de tiempo indeterminado si concurren razones de caso fortuito.
- c) Puede aplicarse a plazos ya vencidos si existe conformidad previa del órgano instructor.
- d) Solo podrá acordarse por los órganos colegiados del Gobierno mediante Real Decreto.

14. Según el artículo 117.1 de la Ley 39/2015, ¿cuál es la regla general respecto a la eficacia del acto impugnado tras la interposición de un recurso administrativo?

- a) La interposición de cualquier recurso suspenderá automáticamente la ejecución del acto impugnado.
- b) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.**
- c) La interposición del recurso suspende el acto únicamente cuando se interponga ante un órgano directivo.
- d) La suspensión se produce de pleno derecho si el recurrente presta caución o garantía pecuniaria suficiente en el registro.

15. De conformidad con el artículo 91.3 de la Ley 39/2015, el plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial será de:

- a) Tres meses a contar desde la fecha del hecho causante de la lesión.
- b) Seis meses a contar desde el inicio del procedimiento.**
- c) Un año a contar desde que el procedimiento quedó visto para sentencia.
- d) Un mes en todo tipo de supuestos simplificados o generales.

16. Según lo establecido en los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (y en concordancia con el artículo 32 de la Ley 40/2015), los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado por la lesión que sufran como consecuencia de:

- a) Únicamente la existencia de dolo o culpa grave por parte de los Jueces y Magistrados.
- b) Únicamente el error judicial acreditado debidamente.
- c) Error judicial y el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.**
- d) El funcionamiento normal o anormal de los órganos judiciales en cualquier tipo de proceso.

17. En virtud del artículo 119.3 de la Ley 39/2015, la resolución de un recurso administrativo:



- a) Podrá ser objeto de delegación en el órgano administrativo que dictó el acto recurrido.
- b) No podrá ser objeto de delegación en el órgano administrativo que dictó el acto recurrido.**
- c) No requiere ser motivada si se desestiman las alegaciones formuladas por el recurrente.
- d) Podrá agravar la situación inicial del recurrente mediante la aplicación de la reformatio in peius.

18. Conforme a lo dispuesto en la legislación procesal y administrativa, la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra un acto o disposición:

- a) Suspende automáticamente la ejecutividad de los actos que impongan obligaciones de hacer.
- b) No suspenderá por sí misma la eficacia del acto impugnado, sin perjuicio de que el órgano judicial pueda acordar de forma expresa una medida cautelar de suspensión.**
- c) Anula con carácter provisional la validez del acto hasta la emisión de la sentencia firme.
- d) Obliga a la Administración autora del acto a dictar un nuevo acto administrativo de sustitución.

19. Según el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, la acreditación de la representación del interesado ante las Administraciones Públicas será necesaria para:

- a) Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.**
- b) Realizar cualesquiera actos y gestiones de mero trámite.
- c) Exclusivamente la formulación de recursos en vía jurisdiccional.
- d) Únicamente cuando la persona representada sea una persona jurídica privada.

20. Si al dictar la resolución han influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme posterior a dicha resolución, ¿de qué plazo dispone el interesado para interponer el recurso extraordinario de revisión conforme al artículo 125.2 de la Ley 39/2015?

- a) De cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- b) De tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.**
- c) De dos meses desde la notificación de la sentencia ejecutoria.
- d) De un mes desde la firmeza formal de la resolución en vía administrativa.

21. Según se establece en el artículo 65 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, son competencias propias de las Diputaciones Provinciales:

- a) Prestar asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios y otras entidades locales.**
- b) La cooperación en el establecimiento de los servicios municipales obligatorios, para garantizar su prestación integral y adecuada en el municipio.
- c) En general, el fomento y la administración de los intereses de los municipios.
- d) Todas son correctas.



22. Según el art. 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Diputación o entidad equivalente:

- a) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal.
- b) Garantiza el desempeño de las funciones públicas necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
- c) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.
- d) Todas son correctas.**

23. La asistencia económico-financiera de las Diputaciones Provinciales a favor de las entidades locales establecida en el art. 69 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón se ejercerá, entre otras, a través de las siguientes formas: (señale la incorrecta)

- a) Mediante el informe y asesoramiento a las consultas formuladas sobre gestión económico-financiera por los órganos competentes de tales entidades.
- b) Mediante la cesión gratuita de bienes, medios o instalaciones propias de las Diputaciones Provinciales.**
- c) Mediante la concesión de préstamos de la Caja de Crédito Provincial.
- d) Colaboración en las funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos municipales y de otras entidades locales.

24. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes en el que es la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordina la prestación de determinados servicios, establece la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 26.2 que:

- a) Para coordinar la citada prestación de los servicios, la Diputación con la conformidad de los municipios afectados, decidirá la forma de prestación, consistente en la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de convenios u otras fórmulas.
- b) Para reducir los costes efectivos de los servicios la decisión de la Diputación deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera.
- c) Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la financiación de los servicios.**
- d) Todas son correctas.

25. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: (señale la incorrecta)



a) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.

b) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.

c) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 1.000 habitantes.

d) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis.

26. Para el procedimiento de elaboración y aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos, señale la incorrecta según lo establecido en el DECRETO 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón:

a) La iniciativa para la formación o modificación de los reglamentos y ordenanzas corresponde a los órganos de las Entidades locales. Los vecinos podrán instarla, bien individualmente o integrados en las entidades o asociaciones legalmente constituidas para la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos.

b) Las Entidades locales podrán solicitar la colaboración técnica y económica de las Diputaciones Provinciales y, en su caso, de la Comarca, para la formación o modificación de los reglamentos y ordenanzas.

c) Las Entidades locales remitirán a la Administración del Estado y al Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, en el plazo de diez días desde su aprobación, el acuerdo de aprobación definitiva del reglamento u ordenanza o la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada de los mismos.

d) Las Entidades locales editarán el texto de sus reglamentos y ordenanzas en la forma que les permita su capacidad económica. Las Diputaciones provinciales y, en su caso, las comarcas, prestarán la ayuda técnica y económica necesaria para el cumplimiento de este mandato.

27. La Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón establece en cuanto a las Ordenanzas y Reglamentos:

a) Las disposiciones generales aprobadas por las Entidades locales en el ejercicio de la potestad reglamentaria y en el ámbito de su competencia adoptarán la denominación de ordenanzas, cuando tuvieren por objeto regular su organización y funcionamiento, o la de reglamentos, en los demás casos.

b) Las ordenanzas y reglamentos de las Entidades locales se integran en el ordenamiento jurídico con sujeción a los principios de jerarquía normativa y publicidad.

c) Lo dispuesto en las ordenanzas y reglamentos vinculará por igual a los ciudadanos y a la Entidad local, sin que pueda ésta dispensar individualmente de su observancia.

d) Todas son correctas.

28. Señale la incorrecta, con carácter previo a la elaboración de un reglamento, establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 133.1, que se sustanciará una consulta



pública, a través del portal web de la Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

- a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
- b) El impacto significativo que pueda tener en la actividad económica.**
- c) Los objetivos de la norma.
- d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

29. En que artículo de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón se establece el Procedimiento de elaboración de reglamentos y ordenanzas.

- a) 48.
- b) 49.
- c) 139.
- d) 140.**

30. El DECRETO 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, en cuanto a las clases de ordenanzas que se establecen en el artículo 126, dice que los municipios podrán aprobar: (señale la incorrecta)

- a) Ordenanza de instalaciones industriales y comerciales.
- b) Ordenanza de actividades peligrosas.**
- c) Ordenanza de aprovechamiento de sus bienes.
- d) Ordenanza general para el buen gobierno de la localidad.

31. Según el artículo 1 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no es correcto que:

- a) La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
- b) Asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de eficiencia, una correcta utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.**
- c) Es igualmente objeto de esta Ley la regulación régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.
- d) En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social.

32. Qué se entiende por “obra” según el artículo 13 de la La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:



- a) el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien mueble.
- b) la realización de trabajos que no modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
- c) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras.
- d) Ninguna es correcta.**

33. Respecto a los procedimientos de contratación establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público cuál de estas afirmaciones no sería correcta:

- a) En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos.
- b) En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una solicitud de participación en respuesta a una convocatoria de licitación.
- c) En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición, estableciéndose la negociación de los términos del contrato con los licitadores.**
- d) En el procedimiento de diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.

34. Según la literalidad del artículo 21 de la La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos a regulación armonizada:

- a) los contratos de servicios cuyo valor estimado sea superior a 140.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- b) los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 216.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la letra anterior.**
- c) los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 140.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- d) los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 216.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

35. Según se establece en el artículo 158.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la adjudicación de un contrato mediante procedimiento abierto, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario sea el precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo de:

- a) máximo quince días.**
- b) quince días.
- c) veinte días.
- d) máximo veinte días.



36. Señale la incorrecta, según el DECRETO 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, para la publicidad de los bandos establecida en el artículo 137:

- a) La difusión general a la población de los bandos ordinarios y extraordinarios se realizará mediante escrito.**
- b) Los bandos se publicarán en los boletines informativos de las Entidades locales, cuando existan.
- c) Así como en los servidores telemáticos de información de que dispongan.
- d) En todo caso, en el tablón de anuncios de la Entidad, dándose a los mismos la máxima publicidad según los usos y costumbres de la localidad.

37. El artículo 85 bis. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que la gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las formas de organismos autónomos locales y de entidades públicas empresariales locales se regirán, respectivamente, por lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en cuanto les resultase de aplicación, con las siguientes especialidades:

- a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de la entidad local, quien aprobará sus estatutos. Deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local, si bien, en el caso de las entidades públicas empresariales, también podrán estarlo a un organismo autónomo local. Excepcionalmente, podrán existir entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza.**
- b) En los organismos autónomos locales deberá existir un consejo de administración, cuya composición se determinará en sus estatutos.
- c) Será necesaria la autorización del Pleno, para celebrar contratos de cuantía superior a las cantidades previamente fijadas.
- d) En las entidades públicas empresariales locales deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en sus Estatutos. El secretario del Consejo rector, que debe ser un funcionario público al que se exija para su ingreso titulación superior, ejercerá las funciones de fe pública y asesoramiento legal de los órganos unipersonales y colegiados de estas entidades.

38. Según la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en cuanto a la función de policía establecida en el artículo 193, la actividad de intervención se ajustará a los principios de: (señale la incorrecta)

- a) igualdad de trato.
- b) Necesidad.**
- c) Proporcionalidad.
- d) Respeto a la libertad individual.

39. En cuanto a la intervención administrativa en la actividad privada, establecida en el Capítulo I de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se especifica en su artículo 194, que el otorgamiento de autorizaciones y licencias se ajustará a las siguientes reglas:



a) Cuando el ejercicio de una actividad por los particulares requiera la obtención de una licencia en cuyo otorgamiento hayan de intervenir diversas unidades o servicios municipales, se les dará tramitación sucesiva para la correcta resolución.

b) Cuando el ejercicio de una actividad por los particulares requiera la obtención de la correspondiente autorización o licencia municipal y las de la Administración de la Comunidad Autónoma, deberá establecerse un procedimiento de gestión coordinada que comportará una sola autorización de una de las dos administraciones. La Administración que no adopte la autorización final deberá informar con carácter previo en relación con el ejercicio de sus competencias propias.

c) Aquellos procedimientos en que deban emitir informe o hayan de intervenir otras Administraciones, y la resolución final corresponda a la entidad local, ésta recabará de aquéllas la realización de las actuaciones pertinentes conforme a la competencia que tuvieran atribuida. Cuando el informe deba ser emitido por la Administración de la Comunidad Autónoma, el plazo para su emisión, salvo que hubiera otro establecido, será de un mes. Si no se emitiese, se entenderá que es favorable.

d) Todas son correctas.

40. En cuanto a los requisitos para la prestación de servicios públicos a los que hace referencia el capítulo II, de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, el artículo 205 establece que el expediente se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Acuerdo inicial del Pleno. La adopción del acuerdo requerirá la elaboración previa por una comisión nombrada al efecto de una memoria comprensiva de los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de gestión, la previsión de los ingresos y precio de los servicios ofertados y los supuestos de cese de la actividad.

b) Exposición pública, por plazo no inferior a quince días, a efectos de reclamaciones y alegaciones.

c) Aprobación del proyecto por el Pleno por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

d) Ninguna es correcta.

41. De las siguientes afirmaciones expresamente recogidas en el artículo 79 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, indique cual es la correcta:

a) El patrimonio, público y privado, de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.

b) Los bienes de las entidades locales son de dominio público o patrimoniales.

c) Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público o privado.

d) Tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda a los montes vecinales de uso y disfrute común de los vecinos.

42. El artículo 80.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que:

a) Únicamente los bienes de dominio público, excluidos los comunales, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.

b) Únicamente los bienes comunales, son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.



c) Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.

d) Los bienes comunales, los bienes privativos afectados a un uso o servicio público, y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.

43. Según el artículo 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales:

a) Requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los siguientes supuestos:

-Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana, pero no de los proyectos de obras y servicios.

- Adscripción de bienes patrimoniales por más de cinco años a un uso o servicio públicos.

b) Requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los siguientes supuestos:

-Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios.

- Adscripción de bienes patrimoniales por más de diez años a un uso o servicio públicos.

c) Requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los siguientes supuestos:

-Aprobación definitiva de los proyectos de obras y servicios, pero no de los planes de ordenación urbana.

- Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio públicos.

c) Requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. No obstante, la alteración se produce automáticamente en los siguientes supuestos:

-Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios.

- Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio públicos.

44. De conformidad con lo regulado en el artículo 83 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los montes vecinales en mano común se regulan por:

a) La normativa sectorial de la Comunidad Autónoma correspondiente.

b) Los usos y costumbres locales.

c) Su legislación específica.

d) La normativa estatal y europea que afecte a los montes locales.

45. De las afirmaciones relativas a los ingresos de derecho privado, dentro del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, indique la afirmación correcta:

a) En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.



- b) Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio público, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.
- c) Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, excluidas las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.
- d) Tendrán también la consideración de ingresos de derecho privado el importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio privado y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a licencia administrativa. En tales casos, salvo que la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa, quien fuera el último concesionario antes de la desafectación tendrá derecho preferente de adquisición directa de los bienes en subasta pública.

46. De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios:

- a) Gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho territorio.
- b) No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad.**
- c) Implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, y afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

47. Según el artículo 2.1 b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos:

- a) Los tributos propios clasificados en tasas, precios públicos, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
- b) Los tributos propios clasificados en precios públicos, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.
- c) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.**
- d) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales, subvenciones e impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales.

48. El procedimiento de recaudación de los ingresos locales se realiza de forma detallada en el Real Decreto:

- a) 929/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.



b) 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

c) 949/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

d) 959/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

49.- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de acuerdo con su artículo 134.4 establece que el importe de la recaudación del recargo provincial se entregará a las respectivas Diputaciones en la forma que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta la fórmula de gestión del:

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.

d) Impuesto sobre Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

50. De acuerdo con el artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos. Personal laboral fijo y temporal. Personal eventual.

b) Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Personal eventual.

c) Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos. Funcionarios en prácticas. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Personal eventual.

d) Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos. Personal laboral fijo y temporal. Personal eventual. Personal Directivo.

51. El artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece expresamente que:

a) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento reglamentario, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

b) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública u organismo público dependiente de la misma por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

c) Son funcionarios de carrera o interinos quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente o no permanente.

d) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.



52. El artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se titula “Concepto de subvención”, dentro del mismo se establece que:

- a) Están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública.
- b) Están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que resulten de una convocatoria pública.
- c) Estarán comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias que en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, realicen las entidades que integran la Administración local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

53. El artículo 14.1 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones indica expresamente que son obligaciones del beneficiario:

- a) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
- b) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
- c) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
- d) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito con la entidad concedente.

54. En relación con lo indicado en el artículo 22 titulado “Procedimientos de concesión” de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, indique la afirmación correcta:

- a) El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. A efectos de esta ley, tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y



adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

b) Podrán concederse de forma directa las subvenciones no previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

c) Podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que se determine en la convocatoria.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

55. El artículo 30.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones relativo a la “Justificación de las subvenciones públicas” indica expresamente lo siguiente:

a) La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará de la manera que se determine reglamentariamente, obligándose a presentarse la forma de cuenta justificativa del gasto realizado pero no podrá acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la presentación de estados contables.

b) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, no deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

c) En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de los justificantes establecidos en el apartado 3 de este artículo, debe aportarse certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.

d) Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia de una determinada situación en el perceptor requerirán obligatoriamente otra justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.

56. En el artículo 34 titulado “Procedimiento de aprobación del gasto y pago” de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece expresamente en su apartado 2 que:

a) Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión directa de la misma, no deberá efectuarse la aprobación del gasto en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones públicas.

b) La resolución de concesión de la subvención conllevará el compromiso del gasto correspondiente.

c) El pago de la subvención se realizará siempre posteriormente a la justificación, por el beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento para el que se concedió en los términos establecidos en la normativa reguladora de la subvención.

d) Podrá realizarse el pago de la subvención aunque el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

57. El Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón determina expresamente en el último párrafo de su artículo 11.2 que:



a) **Las bases reguladoras de las subvenciones de las entidades locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.**

b) Las bases reguladoras de las subvenciones de las entidades locales se podrán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

c) Las bases reguladoras de las subvenciones de las entidades locales se deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones y obligatoriamente mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

d) Las bases reguladoras de las subvenciones de las entidades locales se podrán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una ordenanza general de subvenciones, a través de un reglamento local o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

58. El artículo 12.1 letra i) del Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón establece expresamente que las bases reguladoras de las subvenciones tendrán, como contenido mínimo, el siguiente:

a) Cuantía genérica de la subvención sin fijar criterios para su determinación.

b) Determinación de los componentes de la comisión de valoración.

c) Plazo aproximado en el que se puede notificar la resolución.

d) Periodo durante el cual la persona beneficiaria, en el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, debe destinar dichos bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no puede ser inferior a dos años en el caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a cinco años para el resto de bienes.

59. El Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón, regula en su artículo 27 la “reformulación de solicitudes” dentro del Capítulo titulado “Procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva”. Indique la opción correcta:

a) Cuando la subvención tenga por objeto la financiación de actividades a desarrollar por quien la solicita y el importe a conceder sea superior a la petición de la ayuda, se le podrá instar, si así se ha previsto en las bases reguladoras, a reformular su petición para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable.

b) La comisión de valoración deberá informar previamente a la nueva propuesta de resolución.

c) En ningún caso la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos.

d) Si se hubiese instado la reformulación y el solicitante de la ayuda contesta en el plazo otorgado, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial.

60. El artículo 38.3 del Decreto Legislativo 2/2023, de 3 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón establece que:



- a) En el supuesto de que las subvenciones de capital concedidas excedieran de los 50.000 euros, será preceptivo solicitar la designación de representante de la Intervención General, u órgano de control equivalente en las Entidades locales, para el acto de comprobación material de la inversión de los fondos públicos.
- b) En el supuesto de que las subvenciones de capital concedidas excedieran de los 90.000 euros, será preceptivo solicitar la designación de representante de la Intervención General, u órgano de control equivalente en las Entidades locales, para el acto de comprobación material de la inversión de los fondos públicos.
- c) En el supuesto de que las subvenciones de capital concedidas excedieran de los 200.000 euros, será preceptivo solicitar la designación de representante de la Intervención General, u órgano de control equivalente en las Entidades locales, para el acto de comprobación material de la inversión de los fondos públicos.**
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

61. Según el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función.
- b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.
- c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.
- d) Todas las anteriores son correctas.**

62. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales;

- a) El comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.**
- b) El comité de Seguridad y Salud se reunirá semestral y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
- c) El comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente.
- d) El comité de Seguridad y Salud siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.

63. Dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la misma no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:

- a) Policía, seguridad y resguardo aduanero.
- b) Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.
- c) Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
- d) Todas las anteriores son correctas.**

64. El artículo 15.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, regula los principios de la actuación preventiva. Indique cuál de los siguientes, no es correcto:

- a) Combatir los riesgos en su origen.
- b) Tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.**



- c) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

65. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuál de los siguientes principios no se corresponde con la protección de datos:

- a) Consentimiento de los menores de edad.
- b) Deber de confidencialidad.
- c) Transparencia.**
- d) Exactitud de los datos.

66. ¿Cuál de los siguientes derechos puede ejercer el ciudadano en relación con la protección de sus datos personales, según establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal?:

- a) Derecho de participación.
- b) Derechos de jurisdicción y exclusividad.
- c) Derechos de acceso, rectificación y cancelación.**
- d) Derechos de verificación, reactivación, ejecución y finalización.

67. El Título I de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos digitales, se denomina:

- a) Principios de protección de datos.
- b) Disposiciones generales.**
- c) Disposiciones aplicables a tratamientos concretos.
- d) Derechos de las personas.

68. Conforme al artículo 5.1d) del Reglamento UE 2016/679, los datos serán (artículo 4 Ley Orgánica 5/2018);

- a) Exactos y, si fuera necesario, actualizados.**
- b) Exactos y, en ningún caso, actualizados.
- c) Aproximados y, en ningún caso, actualizados.
- d) Aproximados y, si fuera necesario, actualizados.

69. Según el artículo 1.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón, dicha Ley garantizará de forma efectiva:

- a) El derecho de participación en la planificación, elaboración y evaluación de las políticas públicas del Gobierno de Aragón, a través de mecanismos que promuevan un diálogo abierto, transparente y regular, y de participación en la toma de decisiones en los asuntos que incidan directamente o indirectamente en el interés público.
- b) El derecho a la información pública de forma accesible y comprensible, y a la veracidad y objetividad de esa información.
- c) La transparencia de la actividad pública a través de las obligaciones de publicidad activa.
- d) Todas las anteriores son correctas.**

70. La obligación de difundir de forma permanente, veraz y objetiva la información que garantice la transparencia en la actividad pública, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, se corresponde con:

- a) Participación ciudadana.



- b) Apertura de datos.
- c) Publicidad activa.**
- d) Gobierno abierto.

71. De acuerdo con el artículo 205 del Real Decreto Legislativo 2/2004, cuál de las siguientes opciones, no es un fin de la contabilidad pública local:

- a) Registrar los movimientos y situaciones de la tesorería local.
- b) Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, financiero y de eficacia.
- c) Establecer el balance de la entidad local, poniendo de manifiesto la composición y situación de su patrimonio, así como sus variaciones.
- d) Todas las anteriores son correctas.**

72. En la instrucción del modelo normal de contabilidad local (artículo 9) se establece que la formación de la Cuenta General de la entidad local corresponde a:

- a) Al Presidente.
- b) Al Pleno.
- c) La intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.**
- d) Ninguna de las anteriores es correcta, ya que en los casos de organismos autónomos y sociedades mercantiles, cada entidad deberá formar la suya.

73. Contra la aprobación inicial del presupuesto general de una entidad local puede interponerse:

- a) Recurso de reposición potestativo.
- b) Reclamación económico- administrativa.
- c) Recurso contenciosos-administrativo.
- d) Ninguna de la anteriores es correcta.**

74. En el supuesto de que se presentarán reclamaciones contra la aprobación inicial del presupuesto, el órgano encargado de resolverlas dispondrá para resolverlas de:

- a) Dos meses.
- b) Un mes.**
- c) 20 días.
- d) 10 días.

75. Al presupuesto general de la DPZ, de conformidad con el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, se le debe unir diversa documentación. Indique cuál no es correcta:

- a) La memoria explicativa de su contenido.
- b) La liquidación del ejercicio anterior y avance de la del corriente.
- c) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.**
- d) El anexo de personal de la entidad local.

76. En el presupuesto general de la DPZ, de conformidad con el artículo 164 del Real Decreto Legislativo 2/2004, no se integrará:

- a) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad.**
- b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta.
- c) El presupuesto de la propia entidad.



d) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local.

77. De acuerdo con la Orden HAP/1781/2013, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, artículo 11, la Contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos se configuran como:

- a) Un sistema de registro y elaboración de información sobre la actividad económico-financiera desarrollada durante el ejercicio contable.
- b) Un sistema de elaboración y comunicación de información sobre la actividad económico-financiera y presupuestaria desarrollada durante el ejercicio contable.
- c) Un sistema de registro, elaboración y comunicación de información sobre la actividad económico-financiera y presupuestaria desarrollada durante el ejercicio contable.**
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

78. La obligación a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, se encuentra regulado en el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, en su:

- a) Artículo 1.
- b) Artículo 3.**
- c) Artículo 6.
- d) Artículo 8.

79. De acuerdo con la instrucción de contabilidad, en el modelo normal, los libros contables que obligatoriamente deben llevarse, son:

- a) Libro diario de operaciones.
- b) Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
- c) Libro Mayor.
- d) Todos los anteriores son correctos.**

80. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón, indica, cual de las siguientes opciones, no es uno de los principios generales de la actuación de los poderes públicos aragoneses:

- a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.**
- b) El impulso de la colaboración y cooperación entre las Administraciones públicas aragonesas.
- c) La protección de la maternidad, con independencia del modelo de familia.
- d) La garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

81. De conformidad con el artículo 13.2 de la Constitución Española, modificado por la Reforma Constitucional de 27 de agosto de 1992, ¿en qué proceso electoral se reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo a los extranjeros, atendiendo a criterios de reciprocidad establecidos por tratado o ley?

- a) En las elecciones generales y municipales.
- b) En las elecciones municipales.**



- c) En las elecciones autonómicas y al Parlamento Europeo.
- d) En los referéndums de ámbito estatal y autonómico.

82. Conforme al artículo 21.2 de la Constitución Española, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, ¿cuál es el régimen exigido y bajo qué causa justificada podrá la autoridad competente prohibirlas?

- a) Requieren autorización previa de la autoridad administrativa, que solo podrá denegarse por motivos imperiosos de orden público.
- b) Se exige comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.**
- c) No requieren comunicación ni autorización previa, salvo si se celebran en horario nocturno o en zonas urbanas protegidas.
- d) Se exige declaración responsable, pudiendo la autoridad suspenderlas por conveniencia del tráfico vehicular.

83. Según el artículo 52.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, las Cortes de Aragón no podrán ser disueltas:

- a) Cuando esté en trámite una cuestión de confianza.
- b) Cuando esté en trámite una moción de censura.**
- c) Cuando se esté tramitando el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
- d) Cuando se haya iniciado el procedimiento de investidura del Presidente del Gobierno de Aragón.

84. De conformidad con el artículo 59.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿cuál de las siguientes NO constituye una misión específica del Justicia de Aragón?

- a) La protección y defensa de los derechos individuales y colectivos reconocidos en el Estatuto.
- b) La tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y aplicación.
- c) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en defensa de los derechos de los aragoneses.**
- d) La defensa del Estatuto de Autonomía de Aragón.

85. Conforme al artículo 145.2 de la Constitución Española, las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios, exigiéndose formalmente para la validez de dichos convenios:

- a) Autorización previa mediante Ley Orgánica dictada por las Cortes Generales.
- b) La correspondiente comunicación a las Cortes Generales.**
- c) Aprobación previa por mayoría absoluta del Senado.
- d) Informe vinculante del Consejo de Estado y ratificación por el Consejo de Ministros.

86. De acuerdo con el artículo 44.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno de Aragón puede dictar Decretos-Leyes. ¿Cuál de las siguientes materias queda expresamente excluida de esta regulación provisional?

- a) La fijación de precios públicos y la gestión de tasas autonómicas.



b) El desarrollo de los derechos reconocidos en el Estatuto, las materias que requieran aprobación por mayoría cualificada de las Cortes y los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

c) La estructura orgánica básica de las Consejerías y los procedimientos de concesión de subvenciones de emergencia.

d) Cualquier materia referente al régimen de transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

87. En relación con el sistema de fuentes del Derecho y de conformidad con el artículo 1.4 del Código Civil, los Principios Generales del Derecho:

a) Tienen carácter de fuente subsidiaria de primer grado, aplicándose con preferencia a la costumbre y con alcance informador del ordenamiento jurídico.

b) Se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.

c) Solo se integran en el ordenamiento jurídico cuando son reconocidos de forma expresa por la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo.

d) Operan exclusivamente como criterio interpretativo secundario, careciendo de eficacia directa para fundamentar resoluciones judiciales.

88. De acuerdo con el artículo 47.2.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿cuál es la mayoría requerida en el Pleno provincial para la aprobación del Reglamento Orgánico propio de la Diputación Provincial?

a) Mayoría simple de los miembros presentes.

b) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

c) Mayoría de dos tercios del número legal de miembros.

d) La legislación básica autonómica determina la mayoría según el municipio o provincia.

89. De acuerdo con la Ley 7/1985 (LRBRL), ¿cuáles de los siguientes órganos provinciales son de existencia OBLIGATORIA en la Diputación Provincial de Zaragoza?

a) El Presidente, los Vicepresidentes, el Pleno y la Junta de Gobierno en todo caso, siendo la existencia de las Comisiones Informativas potestativa según determine el Reglamento Orgánico.

b) Exclusivamente el Presidente y los Vicepresidentes, requiriéndose que la provincia supere los 500.000 habitantes para que la Junta de Gobierno sea de existencia obligatoria.

c) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno, el Pleno, las Comisiones Informativas y la Comisión Especial de Cuentas.

d) El Presidente, el Pleno, la Comisión Especial de Cuentas y el Consejo Provincial de Alcaldes.

90. De conformidad con el artículo 115.1 de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿a quién corresponde la iniciativa para la reforma del Estatuto

a) Exclusivamente al Gobierno de Aragón.

b) Al Gobierno de Aragón, a las Cortes de Aragón a propuesta de un quinto de sus Diputados y Diputadas y a las Cortes Generales.

c) A la mitad más uno de los municipios de Aragón.



d) Exclusivamente a las Cortes Generales.

91. De conformidad con el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para la válida constitución del Pleno de una Corporación Local se requiere, en todo caso:

- a) La asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
- b) La asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación, o de quienes legalmente les sustituyan.**
- c) La asistencia del Alcalde o Presidente y de la Junta de Gobierno Local en su totalidad.
- d) La asistencia del Secretario únicamente cuando los acuerdos que se adopten tengan carácter decisorio.

92. En la Constitución Española, el procedimiento de reforma ordinario regulado en el artículo 167 requiere para la aprobación del proyecto por las Cortes Generales:

- a) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.**
- b) Mayoría absoluta del Congreso y dos tercios del Senado.
- c) Mayoría de dos tercios de ambas Cámaras y disolución inmediata del Congreso.
- d) Mayoría simple del Congreso y ratificación obligatoria en referéndum.

93. Según el artículo 112.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el control externo de la gestión económica, financiera y presupuestaria del sector público aragonés corresponde a:

- a) El Tribunal de Cuentas del Estado en régimen de delegación.
- b) La Cámara de Cuentas de Aragón.**
- c) La Intervención General de Aragón.
- d) El Consejo Económico y Social de Aragón.

94. Según el artículo 141.1 de la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales debe ser aprobada por las Cortes Generales mediante:

- a) Ley ordinaria.
- b) Real Decreto-Ley.
- c) Ley Orgánica.**
- d) Real Decreto del Consejo de Ministros.

95. Dentro de la jerarquía normativa del Derecho Administrativo español, ¿qué posición ocupa un Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno?

- a) Subordinado a la Ley ordinaria.
- b) Rango de Reglamento.
- c) Rango de Ley.**
- d) Superior a las Leyes Orgánicas.

96. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 7/1985 (LRBRL), la Junta de Gobierno de una Diputación Provincial está integrada por el Presidente y un número de Diputados no superior a:

- a) La mitad del número legal de los mismos.
- b) El tercio del número legal de los mismos.**
- c) Las dos terceras partes del número legal de los mismos.
- d) Un quinto del número legal de los mismos.



97. De conformidad con el artículo 173 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en relación con el artículo 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando no exista un plazo de prescripción específico establecido por la ley o la ordenanza aplicable, ¿cuál es el plazo de prescripción de las infracciones administrativas muy graves?

- a) Un año.
- b) Dos años.
- c) Tres años.**
- d) Cinco años.

98. En el procedimiento de elaboración de leyes autonómicas, si el Consejo Consultivo de Aragón dictamina que una Proposición de Ley de las Cortes de Aragón contraviene el Estatuto de Autonomía:

- a) El dictamen es obligatorio y vinculante, por lo que la ley no podrá ser aprobada.
- b) El dictamen del Consejo Consultivo no es vinculante por lo que se puede continuar con la tramitación de la ley.**
- c) El procedimiento se suspende hasta que el Gobierno de España decida si lo autoriza.
- d) Las Cortes de Aragón deben remitir el texto al Tribunal Supremo.

99. En la Constitución Española, el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios se regula en:

- a) La Sección 1.^a del Capítulo II del Título I (art. 28).
- b) La Sección 2.^a del Capítulo II del Título I (art. 37).**
- c) El Capítulo III del Título I (art. 40).
- d) El Capítulo I del Título I (art. 12).

100. De acuerdo con la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, las disposiciones administrativas reglamentarias:

- a) Producirán efectos jurídicos desde el momento de su firma.
- b) Entrarán en vigor a los 15 días de su aprobación provisional.
- c) Deberán publicarse en el Diario Oficial correspondiente para que produzcan efectos jurídicos.**
- d) Tienen carácter retroactivo si favorecen el interés general.

SEGUNDO.- Hacer público el cuestionario de preguntas y respuestas del segundo ejercicio de la oposición:

Supuesto práctico nº 1

Por Decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza, se aprueba la concesión de una subvención directa de 15.000 € al Club Atletismo Arneta para la organización del Campeonato de España de Atletismo Sub-16 en Utebo. El presupuesto total de la actividad presentado por el Club asciende a 57.000 €. Dicha subvención se abonará una vez justificada la actividad, tras la presentación y verificación de la cuenta justificativa, con fecha límite 30 de noviembre de 2026, admitiendo gastos ejecutados desde el 1 de enero de 2026 hasta la fecha límite de justificación.

1. El presupuesto total de la actividad es de 57.000 € y la subvención concedida es de 15.000 €. A la vista de la regulación sobre cuantía de las subvenciones en el artículo 19.3 de la LGS, esta situación:



- a) Es incorrecta, porque toda subvención debe cubrir, como mínimo, el 50 % del presupuesto total de la actividad.
- b) No plantea ningún problema, porque la ley exige que el importe de la subvención, aislada o junto con otras ayudas, no supere el coste total de la actividad subvencionada.**
- c) Es incorrecta, porque en las subvenciones directas la cuantía debe coincidir exactamente con el 100 % del presupuesto presentado.
- d) Depende exclusivamente de si el Club es o no una entidad sin ánimo de lucro.

2. Conforme al artículo 71.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, si durante la comprobación de la cuenta justificativa se advierten defectos subsanables, ¿de qué plazo dispone el Club para corregir las deficiencias tras el requerimiento de la Diputación?

- a) 5 días.
- b) 10 días.**
- c) 15 días.
- d) 1 mes.

3. Una vez presentada correctamente la cuenta justificativa, el centro gestor detecta que el Club Atletismo Arnela no se halla al corriente de sus obligaciones de pago con la propia Diputación por mantener deudas pendientes. ¿Qué efecto produce esta circunstancia sobre el pago de los 15.000 € conforme al artículo 34.5 de la LGS?

- a) Se autoriza el pago de la subvención concedida por tratarse de una entidad deportiva sin ánimo de lucro, notificándole que deberá abonar la deuda con posterioridad.
- b) Impide la realización del pago de la subvención en tanto la entidad no acredite estar al corriente o haber extinguido la deuda con la Diputación.**
- c) Inicia de oficio la caducidad del expediente de concesión sin trámite de subsanación.
- d) Se liquida la subvención aplicando una sanción del 20% sobre el importe concedido.

4. En caso de detectarse que el Club omitió el logotipo de la DPZ en el cartel oficial del evento, ¿cuál es la actuación administrativa jurídicamente correcta según la normativa de subvenciones?

- a) Archivo del expediente de liquidación y posterior inicio de procedimiento de reintegro.
- b) Requerimiento para subsanar en el plazo de 15 días, advirtiéndole que es causa de reintegro; si no se subsana en plazo, se iniciaría expediente de pérdida de derecho a cobro.**
- c) Imposición de una penalización del 10% mediante procedimiento sancionador.
- d) Concesión de un plazo de 10 días para presentar alegaciones ante el Pleno Provincial.

5. Entre los justificantes aportados, la entidad incluye facturas que corresponden a un supuesto de subcontratación, emitidas por la empresa Eventos Martínez S.L., cuyo administrador único es el Tesorero de la Junta Directiva del Club. Respecto a este gasto:

- a) Es plenamente subvencionable al tratarse de una sociedad mercantil independiente
- b) Está prohibido contratar con personas o entidades vinculadas al beneficiario, salvo autorización expresa del órgano concedente y que el importe no exceda del coste prestado**
- c) Solo es admisible si el gasto no supera el 10 % del total de la subvención
- d) Es válido siempre que se acredite mediante certificación bancaria la transferencia a la empresa

Supuesto práctico nº 2

Ud. presta servicios en el Departamento de Estudios Económicos, Financieros y Presupuestarios, de la Diputación Provincial de Zaragoza, encargado de las actividades



relacionados con la elaboración, tramitación, gestión y ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Zaragoza.

En relación con las funciones del Departamento, se deben comenzar las tareas para la elaboración del Presupuesto General de la Institución para el ejercicio 2027, y al respecto, se le plantean una serie de cuestiones para su resolución, marcando, únicamente la respuesta correcta de las planteadas.

6. La formación del presupuesto general de la Diputación Provincial de Zaragoza para el ejercicio económico 2027, integrado por el propio presupuesto de la Diputación Provincial de Zaragoza, los presupuestos de cada uno de sus organismos autónomos dependientes, y los estados de previsión de gastos e ingresos de sus sociedades mercantiles, será formado por:

- a) La Intervención General.
- b) La Comisión Especial de Cuentas.
- c) El Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.**
- d) El Pleno.

7. Entre la documentación que el Departamento de Estudios Económicos ha unido al presupuesto de la Diputación Provincial de Zaragoza para el ejercicio 2027, en elaboración, se ha incluido un documento que no debe adjuntarse.

Indíquelo:

- a) Anexo de ordenanzas fiscales en vigor en el ejercicio corriente.**
- b) Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, al menos, a seis meses del ejercicio corriente.
- c) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.
- d) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

8. Una vez formado el Presupuesto para el ejercicio 2027 y emitido informe al efecto por la Intervención General, el mismo deberá remitirlo al Pleno de la Diputación Provincial para su aprobación inicial, enmienda o devolución, antes del:

- a) 30 de agosto de 2026.
- b) 15 de septiembre de 2026.
- c) 1 de octubre de 2026.
- d) 15 de octubre de 2026.**

9. Respecto al acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2027, que efectuara el Pleno, dicho acuerdo:

- a) No podrá aprobarse separadamente ningún presupuesto de los integrados en el presupuesto general.
- b) Será único.
- c) Habrá de detallar los presupuestos que integran el presupuesto general.
- d) Todas las respuestas son correctas.**

10. Aprobado inicialmente el presupuesto general de la Diputación Provincial de Zaragoza, para el ejercicio 2027, y con el objeto de que los interesados puedan examinarlo y presentar alegaciones ante el Pleno, se expone al público, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, por un periodo de:

- a) 10 días.
- b) 15 días.**
- c) 20 días.
- d) Un mes.



Supuesto práctico nº 3

María Gómez solicita una licencia municipal para la apertura de un pequeño establecimiento comercial en su municipio. La solicitud se presenta a través del registro electrónico del Gobierno de Aragón el día 25 de diciembre de 2025, en la que el solicitante indica la dirección de un correo electrónico.

El Ayuntamiento registra correctamente la solicitud y, tras revisar la documentación, detecta que falta un certificado técnico que se considera obligatorio para la concesión de la licencia. El 2 de enero de 2026 se practica una notificación electrónica requiriendo a María para que aporte el certificado dándole un plazo de 10 días hábiles, transcurren los días y María no accede al contenido de la notificación.

Finalmente, la Administración considera rechazada la notificación por el transcurso del plazo y continúa la tramitación del expediente.

Posteriormente, el Ayuntamiento dicta Resolución denegando la licencia por falta de documentación esencial que se notifica a través de correo postal a María el 20 de abril de 2026.

María presenta un escrito de alegaciones el 5 de mayo de 2026 alegando que desconocía el requerimiento de subsanación; el funcionario del Ayuntamiento que lo recibe le dice que el trámite de alegaciones ya había finalizado y que contra la Resolución procede interponer recurso administrativo.

11. ¿Tiene María obligación de relacionarse con la administración de forma telemática?, señale la respuesta correcta:

- a) Todas las personas físicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas en cualquier procedimiento.
- b) Ninguna persona física puede utilizar medios electrónicos para relacionarse con la Administración.
- c) Las personas físicas, con carácter general, pueden elegir si se relacionan con la Administración por medios electrónicos o no, salvo que una norma establezca su obligación de hacerlo electrónicamente.**
- d) Las personas físicas solo pueden utilizar medios electrónicos cuando actúan representadas por un abogado.

12. El ayuntamiento dispone de 3 meses para resolver el procedimiento de concesión de licencias ¿Cuándo comienza el plazo ?

- a) Desde la fecha en que María firmó la solicitud.
- b) Desde la fecha en que el Ayuntamiento abrió el expediente administrativo.
- c) Desde la fecha en que la solicitud que presentó María tuvo entrada en el registro del ayuntamiento.**
- d) Desde el día siguiente a la presentación de la solicitud.

13. María Gómez recibe el 20 de abril de 2026 la resolución denegatoria de una licencia municipal. El 5 de mayo presenta un escrito denominado "alegaciones" en el que solicita la revisión de la resolución por entender que una notificación defectuosa le causó indefensión. El Ayuntamiento considera que, por haberse presentado una vez finalizado el trámite de alegaciones, procede su inadmisión. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es jurídicamente más correcta?

- a) La Administración debe inadmitir el escrito, pues las alegaciones formuladas tras la resolución son siempre inadmisibles.
- b) La Administración puede inadmitir el escrito al no identificarse expresamente el recurso ejercitado.



c) **La Administración debe analizar el contenido del escrito y, si de este se deduce una voluntad impugnatoria, tramitarlo como recurso; su presentación bajo la denominación de "alegaciones" no constituye por sí misma causa de inadmisión.**

d) La Administración debe convertir de oficio el escrito en una solicitud de revisión de oficio.

14. María interpone en plazo un recurso de alzada contra la Resolución administrativa que no pone fin a la vía administrativa transcurren más de tres meses sin respuesta. María entiende desestimado el recurso y no estando conforme presenta un recurso de Reposición contra dicha desestimación presunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a) El recurso de Reposición es admisible porque la primera resolución fue presunta.

b) El recurso de Reposición debe inadmitirse, ya que contra la resolución, expresa o presunta, de un recurso de alzada no cabe otro recurso administrativo ordinario.

c) María debe interponer un recurso de alzada.

d) La Administración está obligada a resolver favorablemente el segundo recurso.

15. La Resolución que denegó la licencia solicitada por María adquirió firmeza. Meses después, María descubre un documento técnico de fecha anterior a la resolución que acredita que cumplía todos los requisitos exigidos y que no pudo aportar por una causa no imputable a ella. ¿Qué recurso podría plantearse, en su caso?

a) Recurso extraordinario de revisión, siempre que concorra alguna de las circunstancias legalmente previstas en el art 130.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) Recurso potestativo de reposición.

c) Recurso extraordinario de revisión, siempre que concorra alguna de las circunstancias legalmente previstas en el art 125.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

d) Ningún recurso, por tratarse de un acto firme en vía administrativa.

Supuesto práctico nº 4

La Diputación Provincial de Zaragoza se encuentra actualmente estableciendo sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados, para lo que encarga al Servicio de Recursos Humanos varios informes al respecto. Dentro del citado Servicio trabajan, entre otros, varios auxiliares administrativos, en concreto Doña Beatriz Caballero y Don Francisco Tudor.

Doña Beatriz es funcionaria interina y está encargada, entre otras tareas, de mecanografiar los informes del Servicio y ha detectado varios errores en el informe relativo a la evaluación del desempeño por que procede a comunicarlos a sus superiores.

Pasado un mes desde su nombramiento, Doña Beatriz detecta en su Decreto de nombramiento como funcionaria interina que se le encomiendan funciones que implican la participación indirecta en el ejercicio de potestades públicas. Asimismo, estando en el trabajo ha recibido una llamada urgente por un accidente grave que ha sufrido un familiar de segundo grado de consanguinidad que no convive con ella.

Don Francisco es funcionario de carrera y se encarga principalmente de tareas de cálculo y archivo de documentos. Ha participado recientemente como parte de un Tribunal Calificador en una entidad local, en la que tiene una segunda residencia, que le han comunicado que están valorando que los gastos de asistencia y desplazamiento como miembro del Tribunal se lo pagarán mediante participación en los tributos que debe pagar como residente en dicha entidad local.



Por otro lado, debido a una serie de problemas personales D. Francisco ha solicitado a la Diputación que le permita teletrabajar un día a la semana, a lo que se le ha contestado afirmativamente. En el Decreto de aprobación del teletrabajo se establece, entre otras medidas, que la Diputación pagará los gastos de mantenimiento de la red wifi y de la luz, excepto el ordenador portátil que debe aportarlo el trabajador.

16. Detectados varios errores por Doña Beatriz en el informe relativo a la evaluación del desempeño, y de acuerdo con el artículo 20.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), ¿Cual sería la afirmación correcta de acuerdo con la normativa citada?

a) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

b) Los sistemas de evaluación del desempeño no tienen porqué adecuarse a criterio alguno aunque sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

c) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán con menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

d) Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán a criterios subjetivos indeterminados y se aplicarán con menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

17. De acuerdo con el artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), ¿Puede Doña Beatriz realizar las funciones detectadas en su Decreto de nombramiento?

a) No puede ya que la norma establece que “En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos y personal laboral fijo, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.

b) No puede ya que la norma establece que “En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.

c) Sí puede ya que la norma establece que “En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios de carrera o interinos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.

d) Sí puede ya que la norma establece que “En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios de carrera, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca, sin perjuicio de que los funcionarios interinos puedan realizar funciones que impliquen la participación indirecta en el ejercicio de las potestades públicas”.

18. De conformidad con el artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), ¿Consideras correcto el pago que se le quiere realizar a Don Francisco como contraprestación a su asistencia como Tribunal?



- a) Sí, porque según la citada norma podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas.
- b) Sí, porque según la citada norma podrá percibirse participación en tributos, tasas, contribuciones o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.
- c) No, puesto que según la citada norma no podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, sino que le deben pagar obligatoriamente mediante un complemento específico creado al efecto.
- d) No, puesto que según la citada norma no podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.**

19. Según el artículo 47bis.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP) ¿son correctas las medidas decretadas para el teletrabajo concedido a Don Francisco?

- a) No, porque según la citada norma la Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su actividad.**
- b) No, porque según la citada norma la Administración no está obligada a sufragar necesarios para esta modalidad de teletrabajo.
- c) Sí, porque según la citada norma la Administración sufragará a las personas que trabajen en esta modalidad los gastos derivados del mismo, pero no los medios tecnológicos necesarios para su actividad.
- d) Sí, porque según la citada norma el trabajador aportará los medios tecnológicos necesarios para su actividad.

20. De acuerdo con el artículo 48 a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), ¿Qué permiso le corresponde a Doña Beatriz por el accidente de su familiar?

- a) Le corresponde un permiso de cinco días hábiles.
- b) Le corresponde un permiso de cuatro días hábiles.**
- c) Le corresponde un permiso de tres días hábiles.
- d) Le corresponde un permiso de dos días hábiles.

TERCERO.- Conceder un plazo excepcional de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zaragoza para las alegaciones que, en su caso, se formulen contra las preguntas y/o respuestas del cuestionario del primer y segundo ejercicio de la oposición.

Dichas solicitudes deberán ser por escrito a través del Registro General de Entradas de esta Diputación. En caso de que se realice por procedimiento administrativo, deberán remitir, dentro del plazo concedido, copia de dicha solicitud al siguiente correo electrónico: personalseleccion@dpz.es

Zaragoza, a 29 de septiembre de 2026.

La Presidenta del Tribunal,

Fdo: Cristina García Romero

